

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 21° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-3165-2021
CARATULADO : SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD
S.A/BANCO SANTANDER - CHILE

Santiago, doce de Julio de dos mil veintidós

VISTOS:

Con fecha 1° de abril de 2021, comparece don Juan Bautista Gutiérrez Casas, abogado, en representación convencional de **SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.**, sociedad anónima de servicio público de distribución de energía eléctrica, representada legalmente por don Francisco Alliende Arriagada, ingeniero comercial, todos con domicilio para estos efectos en Manuel Antonio Matta N°549, oficina 702, comuna de Osorno, quien deduce demanda de cobro de pesos, en juicio ordinario de mayor cuantía, en contra de **BANCO SANTANDER-CHILE**, persona jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por su gerente general, don Miguel Arturo Mata Huerta, ingeniero comercial, ambos domiciliados en calle Bandera N°140, comuna de Santiago.

Funda su demanda en que su representada es una concesionaria de servicio público de distribución de energía eléctrica, siendo uno de sus clientes es la empresa Roblencina Servicios Limitada, que recibe suministro eléctrico, a través, del servicio N°400000093898, ubicado en calle Inmaculada N°628, Parque industrial Recondo, en la comuna de Puerto Montt, inmueble inscrito a fojas 2643 vta., N°2772 del Registro de Propiedad del año 2004 del Conservador de Bienes Raíces correspondiente.

Indica que el servicio eléctrico a nombre de Roblencina Servicios Limitada adeuda la suma de \$67.463.160.-, más reajustes e interés, correspondiente a deuda impaga por concepto de consumos de energía y potencia eléctrica.

Prosigue, señalando que, con fecha 28 de febrero de 2017, la demandada celebró contrato de compraventa con Roblencina Servicios Limitada, adquiriendo el inmueble antes individualizado, según consta en



inscripción de fojas 1143, N°1463 correspondiente del Registro de Propiedad del año 2017 del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt.

Ahora bien, expresa que la referida empresa continúa utilizando el inmueble, lugar en el que realiza actividades de comercialización de insumos para la industria salmonera, además de fabricación de bolsas para refrigeración tipo gel pack de poliestireno y de polipropileno, bajo la marca “Indugel”, adeudando el servicio de las correspondientes a las facturas 5860751, 5903138 y 5943943, lo que asciende a la suma de **\$35.056.091.-**, más reajustes e intereses.

Añade que, conforme la legislación eléctrica vigente, concretamente el artículo 225, letra Q de la Ley General de Servicios Eléctricos, los consumos adeudados, se encuentran radicados en el inmueble suministrado con energía, debiendo ser pagados por quien sea su dueño actual, quien es la demandada de autos; asimismo, se remite al artículo ya citado previamente y a los artículos 146, inciso segundo, y 147 del Decreto 327 o Reglamento General de Servicios Eléctricos, a fin de sustentar su tesis.

Seguidamente, hace presente que su representada ha incoado demanda ejecutiva contra Roblencina Servicios Limitada en causa rol C-1339-2020, sustanciada ante el Primer Juzgado Civil de Puerto Montt, en la cual no ha sido posible obtener el pago de la totalidad de lo adeudado por consumo de potencia y energía eléctrica, atendido que no ha sido posible embargar bienes suficientes; igualmente, adiciona que es conocida la mermada situación financiera de la empresa aludida, máxime cuando le consta que varios inmuebles de su propiedad fueron enajenados a fin de ocultar su patrimonio durante el año 2019, no contando con mayores bienes en la actualidad que permitan cubrir la totalidad de la deuda para con su representada.

Ahora bien, afirma que la demandada en calidad de dueña del inmueble donde se suministró el servicio de energía eléctrica referido en la demanda, debe asumir todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones legales que le corresponden personalmente a “Roblencina Servicios Limitada”, conforme las normas jurídicas ya expuestas.



Por dichas consideraciones, previas citas legales, pide tener por interpuesta demanda ordinaria de cobro de pesos, en juicio ordinario de mayor cuantía, en contra de **BANCO SANTANDER-CHILE**, representada por don Miguel Arturo Mata Huerta, ambos ya individualizados, a fin de que sea condenada al pago de **\$35.056.091.-**, o bien la suma que el tribunal determine conforme al mérito del proceso y las probanzas que se rindan, más los reajustes e intereses que correspondan, con expresa condena en costas.

Con fecha 31 de mayo de 2021, se notificó la demanda en la forma prevista en el inciso 2º del artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

Con fecha 16 de junio de 2021, comparece don Eugenio Labarca Birke, abogado, en representación convencional del **BANCO SANTANDER - CHILE**, quien contesta la demanda, solicitando su rechazo, con costas.

Primeramente, opone la excepción de falta de legitimación pasiva, fundada en que la actora ha señalado expresamente en su libelo pretensor que su deudora y, por ende, sujeto pasivo de la acreencia que pretende cobrar en autos es la empresa Roblencina Servicio Limitada y no su representada; asimismo, añade que las tres facturas referidas, fueron emitidas a nombre de Roblencina Servicio Limitada y no a nombre de su representada.

Seguidamente, acusa que la norma citada, la cual justificaría el cobro de autos, se trata de una disposición de carácter general que permite perseguir el cobro de consumo de energía eléctrica que ha tenido lugar en un determinado inmueble, genéricamente en contra del propietario del mismo, sea éste quien sea y a quien no se ha identificado previamente; en consecuencia, cuando ha existido un contrato específico suscrito previamente con un usuario determinado que se encuentra en el mismo inmueble y que ha contratado un tipo de energía especial, como sucede en el caso de la especie, este precepto no tiene aplicación, más aun cuando la propia actora ha reconocido conocer a la empresa a quien le ha prestado el servicio de distribución de energía eléctrica que indica.



Finalmente, sostiene que dichas facturas le son inoponibles a su representada.

A continuación, también afirma que el cobro de autos no se funda en título legal alguno, ya que en la especie no existe solidaridad en la obligación de pago en la forma previas por el artículo 1511 del Código Civil, de estos servicios entre Roblencina Servicios Limitada y su representado.

Posteriormente, **acusa que la demanda de autos va contra de los actos propios de la actora**, para lo cual cita a doctrina y jurisprudencia sobre la materia, ya que ha mantenido una conducta anterior que revela una posición jurídica discordante y contradictoria con la que ha asumido en este juicio, perjudicando los intereses de su representada; habida cuenta que antes de iniciar este juicio, primero emitió las facturas en cuestión a nombre de Roblencina Servicios Limitada y procedió al cobro ejecutivo de dichas facturas en contra de dicha empresa en un proceso que aún se encuentra vigente.

En un acápite diverso, asevera que no es posible acceder a la demanda de autos por concurrir en la especie el efecto de **cosa juzgada con eficacia refleja** que ha determinado en forma inalterable que el único sujeto pasivo de la acción de cobro de las tres facturas cuyo pago se demanda en autos, es la sociedad Roblencina Servicios Limitada y no el Banco Santander Chile; todo ello de conformidad a la certificación en los términos del artículo 472 del Código de Procedimiento Civil efectuada en el proceso ejecutivo aludido en la demanda, con lo que se omitió sentencia, debiendo proseguirse con la ejecución.

Así las cosas, sostiene que dicha circunstancia tiene lugar en virtud de la propia naturaleza del procedimiento ejecutivo en que no se está frente a una pretensión discutida, sino que a un título ejecutivo que da cuenta de una obligación indubitada, tanto así que el mandamiento de ejecución y embargo hace las veces de sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales, en especial para la cosa juzgada que emana de ella; en definitiva, asegura que en el juicio anteriormente seguido por la actora en contra del efectivo usuario y consumidor del servicio de energía eléctrica reclamada,



quedó establecido que tales consumos fueron facturados a nombre de Roblencina Servicios Limitada; que con la notificación judicial de tales facturas a dicha empresa quedó constituido un título ejecutivo perfecto en su contra; y que no habiendo opuesto excepciones a la ejecución se ha producido el efecto de cosa juzgada establecido en el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil, dejando establecido como hecho inamovible que dicha empresa es la única deudora de tales obligaciones.

Así las cosas, indica que, conforme lo expuesto, se ha constituido un estatus jurídico que tiene un efecto erga omnes, pues la cosa juzgada producida en el juicio ejecutivo en comento tiene “eficacia refleja” frente a terceros, en particular frente a la demandante, para lo cual cita doctrina sobre la materia.

Finalmente, señala que si, en el proceso ejecutivo aludido ha quedado establecido en forma inamovible el hecho que Roblencina Servicios Limitada es la deudora de las facturas en cuestión, la eficacia refleja de la cosa juzgada que se ha producido en dicho proceso por aplicación del artículo 472 del Código de Procedimiento Civil, impide que la actora pretenda cobrar las mismas facturas nuevamente, esta vez a su representado, al no existir ninguna declaración de solidaridad en el pago de dicha obligación, ni legal ni contractual, que vincule a Banco Santander Chile como sujeto pasivo de ésta.

Con fecha 05 de julio de 2021, se evacuó el trámite de réplica, reproduciendo ya expuestos en su demanda y negando la contradicción acusada en los fundamentos de su acción.

Prosigue, indicando que, la sociedad Roblencina es deudora personal de la demandante, cuya fuente de sus obligaciones radica en un contrato, tal cual así señala el Código Civil en el artículo 1437; asimismo, señala que la demandada es un deudor real, y cuya fuente de su obligación es la ley eléctrica, para lo cual se remite a doctrina al efecto; en consecuencia, sostiene que no existe falta de legitimación pasiva, pues según señala la ley eléctrica, quien sea el dueño de un inmueble, que ostente un servicio eléctrico impago, es deudor del consumo radicado.



Posteriormente, a fin de sustentar su alegación, se remite a la Circular N°10553 de 22 de noviembre de 2013 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que señala: *“Alcances sobre la radicación. El ordenamiento jurídico chileno distingue entre otro tipo de obligaciones, las llamadas obligaciones reales y personales. Las primeras son aquellas que son exigibles a quien posea o esté en propiedad de una cosa, a diferencia de las segundas que contiene exigencias imputables a determinadas personas sobre quienes recae dicha obligación. En materia eléctrica, las obligaciones originadas en el servicio eléctrico que recibe una persona natural o jurídica, se radican por regla general, en el mismo inmueble que recibe el suministro, así lo indica el artículo 225 letra g) de la Ley General de Servicios Eléctricos.*

Como se advierte, de la definición transcrita fluye con claridad, que el suministro se entrega a un inmueble o a una instalación, siendo entonces, en este bien materia en donde quedarán radicadas las deudas que se generen por el eventual no pago de dicho servicio.

De la procedencia de la radicación de deuda. Cómo se indicó la radicación de una deuda, es el efecto legal que se produce cuando una deuda de consumo no es satisfecha después de vencido el plazo otorgado para el pago de la primera boleta o factura y hasta transcurridos 45 días desde ese vencimiento. En ese caso, las deudas originadas en el servicio eléctrico quedarán asociadas a inmueble o instalación que ha recibido el suministro y serán exigibles en ese inmueble o instalación con independencia de quien sea su propietario o poseedor.

La radicación legal. Es aquella que comprende el monto que se genere y adeude durante el período que va desde la primera lectura comprendida en la primera boleta impaga, hasta el día 45 siguiente a la fecha de vencimiento de esa primera boleta impaga”.

Añade que el título legal para cobrar, lo otorga la ley, siendo su fuente, por lo cual no es necesario aludir a lo expresado por la contraria, pues la ley eléctrica, señala al dueño como responsable del crédito insoluto, acotado expresamente a lo señalado en la ley eléctrica, es decir, se le está cobrando lo que señala la disposición legal, que establece claramente los



montos específicos, que se pueden cobrar al dueño del inmueble y estos fueron claramente explicados en la demanda.

Seguidamente, niega contravenir sus actos propios, arguyendo que su conducta se encuentra ajustada a derecho como ya lo ha señalado.

Finalmente, respecto de la cosa juzgada refleja, sostiene que no se cumplen los requisitos o elementos para que la referida institución se verifique, por cuanto no se ha cumplido con la triple identidad.

Con fecha 20 de julio de 2021, la parte demandada evacúa el trámite de la dúplica, reiterando los argumentos expresados en su contestación y añadiendo que, en la especie no se está en presencia del cobro de dos obligaciones, sino de una sola obligación, referida al pago de tres facturas a nombre de la sociedad Roblencina y no del Banco, ya que el título invocado por la parte demandante son precisamente tales facturas que se ha emitido en virtud de un contrato en que su representado no ha sido parte, ni ha suscrito con la actora.

Con fecha 03 de septiembre de 2021, se celebró la audiencia de conciliación, la que contó con la presencia de los apoderados de ambas partes del proceso, quienes, llamadas a conciliar, no alcanzaron acuerdo.

Con fecha 16 de septiembre de 2021, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la documental que obra en autos.

Con fecha 19 de abril de 2022, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, con fecha 1º de abril de 2021, comparece don Juan Bautista Gutiérrez Casas, abogado, en representación convencional de **SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.**, ya individualizados, quien deduce demanda de cobro de pesos, en juicio ordinario de mayor cuantía, en contra de **BANCO SANTANDER-CHILE**, ya individualizado, a fin de que sea condenada al pago de **\$35.056.091.-**, o bien la suma que el tribunal determine conforme al mérito del proceso y las probanzas que se rindan, más los reajustes e intereses que correspondan, con expresa condena en costas.



Funda su demanda en los antecedentes de hecho y de derecho que ya han sido debidamente reseñados en la parte expositiva de la sentencia, los cuales se dan por enteramente reproducidos en este motivo.

SEGUNDO.- Que, con fecha 16 de junio de 2021, comparece don Eugenio Labarca Birke, abogado, en representación convencional del **BANCO SANTANDER - CHILE**, quien contestó la demanda, solicitando su rechazo, con costas; oponiendo las defensas que ya han sido plasmadas en la parte expositiva de la sentencia.

TERCERO.- Que, con fecha 05 y 20 de julio de 2021, las partes evacuaron los trámites de la réplica y la dúplica, respectivamente; reiterándose los argumentos fundantes de sus presentaciones principales.

CUARTO.- Que, a fin de sustentar su acción de cobro de pesos, la demandante rindió la siguiente prueba documental, inobjetada de contrario, consistente en:

1.- Facturas electrónicas N°s 5860751, 5903138 y 5943943, emitidas por Sociedad Austral de Electricidad S.A. a nombre de Roblencina Servicios Ltda., por la suma total de \$35.056.091.-;

2.- Copia de inscripción de dominio rolante a fojas 1143, número 1463 correspondiente al Registro de Propiedad del año 2017 del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt;

3.- Copia de Circular N°10553 del 22 de noviembre de 2013, emitido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC);

QUINTO.- Que, por su parte, la demandada ha rendido la siguiente documental, inobjetada de contrario, consistente en:

.- Piezas procesales de los autos ejecutivos Rol C-1339-2020, seguidos ante el 1° Juzgado de Letras de Puerto Montt;

SEXTO.- Que, asimismo, la demandada solicitó en el otrosí de la presentación de fecha 02 de noviembre de 2021, que se oficiara al 1° Juzgado de Letras de Puerto Montt, a fin de que se remitiera el expediente Rol C-1339-2020, seguido ante ese tribunal. Dicho oficio fue concedido por



el tribunal, siendo remitido el expediente referido con fecha 23 de febrero de 2022.

SÉPTIMO.- Que, seguidamente, corresponde consignar que son hechos del proceso, por cuanto no han sido controvertidos por las partes, los siguientes:

1.- Que, la **SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A.**, en su calidad de distribuidora de energía eléctrica, proporcionó sus servicios de distribución a la empresa Roblencina Servicios Limitada, específicamente, en el inmueble ubicado en calle Inmaculada N°628, Parque industrial Recondo, en la comuna de Puerto Montt;

2.- Que, en razón de los servicios prestados por la actora a Roblencina Servicios Limitada, hasta el mes de septiembre de 2019, se facturaron bajo los N°s 5860751, 5903138 y 5943943, la suma de **\$35.056.091.-**, más reajustes e intereses, los cuales, a la época de la interposición de la demanda, se encuentran adeudados;

3.- Que, con fecha 24 de febrero de 2020, la actora inició gestión preparatoria de notificación de facturas en contra de Roblencina Servicios Limitada, por seis facturas, dentro de las que se encuentran las tres señaladas en el numeral anterior. Una vez, perfeccionados los títulos, con fecha 19 de junio de 2020, se dedujo demanda ejecutiva de cobro de facturas contra la referida empresa, siendo dicho proceso seguido ante el 1° Juzgado Civil de Puerto Montt, bajo el Rol C-1339-2020;

4.- Que, con fecha 28 de febrero de 2017, Banco Santander Chile compró a Roblencina Servicios Limitada, el inmueble ubicado en calle Cardonal, comuna de Puerto Montt, correspondiente al Lote o sitio número 6A, cuyo plano, permiso de subdivisión y memoria explicativa se encuentran archivados bajo los números 541 y siguientes en los documentos anexos del registro de propiedad del año 2004, cuya inscripción de domino rola a fojas 1143. número 1463 correspondiente al Registro de Propiedad del año 2017 del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt;

OCTAVO.- Que, el Decreto con Fuerza de Ley 4; Decreto con Fuerza de Ley 4/20018, que fija texto refundido, coordinado y



sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, dispone en su artículo 225, letra q), a la letra, lo siguiente: *“Para los efectos de la aplicación de la presente ley se entiende por: q) Usuario o cliente: es la persona natural o jurídica que acredite dominio sobre un inmueble o instalaciones que reciben servicio eléctrico. En este inmueble o instalación quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio para con la empresa suministradora.*

No obstante, si el concesionario no suspendiere el servicio por la causal indicada en el artículo 141º, las obligaciones por consumos derivadas del servicio para con la empresa suministradora que se generen desde la fecha de emisión de la siguiente boleta o factura no quedarán radicadas en dicho inmueble o instalación, salvo que para ello contare con la autorización escrita del propietario.”

Por su parte, el artículo 146 del Reglamento General de Servicios Eléctricos, dispone: *“El usuario o cliente deberá pagar el suministro en el plazo señalado en la respectiva boleta o factura. Dicho plazo no podrá ser inferior a 10 días desde la fecha de su despacho al cliente.*

Para estos efectos, usuario o cliente es la persona natural o jurídica que acredite dominio sobre un inmueble o instalaciones que reciben servicio eléctrico. En este inmueble o instalación quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio para con la empresa suministradora, salvo las excepciones contempladas en el artículo siguiente.”

Finalmente, el artículo 147 del mismo texto legal, prescribe: *“El concesionario podrá suspender el suministro en caso que un servicio se encuentre impago, previa notificación al usuario con, al menos, 5 días de anticipación. Este derecho sólo podrá ejercerse después de haber transcurrido 45 días desde el vencimiento de la primera boleta o factura impaga.*

No obstante, si luego de vencido este plazo el concesionario no suspendiere el servicio por esta causal antes de la emisión de la siguiente boleta o factura, las obligaciones por consumos derivadas del servicio para con la empresa suministradora que se generen desde la fecha de emisión de



esta última boleta o factura, no quedarán radicadas en el inmueble o instalación, salvo que para ello contare con la autorización escrita del propietario. Esta autorización no podrá ser otorgada antes de verificada la condición que habilita la suspensión del suministro y deberá acompañarse de un certificado de dominio vigente que acredite haber sido otorgada por el propietario del inmueble o instalación.

No obstante haberse otorgado la autorización referida, si con posterioridad a ella se configura la causal que autoriza a suspender el suministro y el concesionario no ejerciere tal derecho en los plazos y forma definidos en los incisos anteriores, las obligaciones derivadas del servicio eléctrico que se generen desde la fecha de emisión de la siguiente boleta o factura, dejarán de radicarse en el inmueble o instalación, salvo que el propietario de éstos otorgue nueva autorización en la forma establecida en el inciso anterior. La misma norma se aplicará cada vez que se cumpla la condición que habilita al concesionario para suspender el suministro por no pago.”

NOVENO.- Que, primeramente, corresponde pronunciarse respecto de la **excepción de falta de legitimación pasiva** interpuesta por el Banco Santander Chile, la que debe ser analizada en relación a lo dispuesto por el artículo 225, letra q) de la Ley General de Servicios Eléctricos, norma jurídica que señala expresamente que el usuario o cliente es la persona natural o jurídica que acredite el dominio del inmueble en el que se recibe el servicio eléctrico, quedando radicadas las obligaciones derivadas del servicio en dicho inmueble.

Ahora bien, dicha norma jurídica tiene por objeto facilitar el cobro del servicio de distribución eléctrica, pero establece una limitación, ya que si el concesionario no suspende el servicio después de 45 días del vencimiento de la primera factura, la obligación que se genere desde la fecha de emisión de la siguiente boleta o factura no quedará radicada en el inmueble.

Así las cosas, de un análisis del proceso ejecutivo seguido ante el 1º Juzgado de Letras de Puerto Montt, se observa que en dichos autos se cobran 6 facturas, las N°s **5860751** (con vencimiento al **29 de agosto de 2019** - por el periodo de 30 de junio al 31 de julio de 2019), por la suma



de \$11.320.537.-; **5903138** (con vencimiento al 1º de octubre de 2019 - por el periodo de 31 de julio al 31 de agosto de 2019), por la suma de \$22.649.316.-; **5943943** (con vencimiento al 25 de octubre de 2019 - por el periodo de 31 de agosto al 30 de septiembre de 2019), por la suma de \$35.056.091.-; **5993330** (con vencimiento al 28 de noviembre de 2019 - por el periodo de 30 de septiembre al 31 de octubre de 2019), por la suma de \$46.311.054.-; **6033553** (con vencimiento al 27 de noviembre de 2019 - por el periodo de 31 de octubre al 30 de noviembre de 2019), por la suma de \$46.594.043.-; y **6079634** (con vencimiento al 28 de enero de 2020 - por el periodo de 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2019), por la suma de \$63.128.053.-

De las facturas antes mencionadas, solo las primeras tres han sido cobradas en este proceso, por cuanto se ha seguido la regla establecida en los artículos 141 y 225, letra q) de la Ley General de Servicios Eléctricos, ya que dicha normativa solo permite que el cobro de los servicios prestados por la concesionaria se radique en el inmueble hasta el límite de los 45 días contados desde el vencimiento de la primera factura adeudada; en consecuencia, en autos, la primera de las facturas indica como fecha de vencimiento al día **29 de agosto de 2019**, es decir, desde dicha época se ha contar el plazo de 45 días, el cual concluyó al día **13 de octubre del mismo año**, por lo que solo los cobros correspondientes a las facturas emitidas desde el mes de noviembre siguiente, no se radicarían en el inmueble como lo dicta la norma, con lo que se colige que los servicios facturados antes de esa fecha cabe por tenerlos por radicados en el inmueble.

En consecuencia, teniendo presente que las facturas cobradas en autos se emitieron hasta el 04 de octubre de 2019, solo cabe colegir que la demandada se encuentra del todo legitimada pasivamente para ser objeto de la acción de cobro de pesos que se analiza, por lo que dicha excepción será del todo desechada.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta indispensable consignar que el resto de las alegaciones relacionadas con identidad de empresa respecto de la cual se ha emitido las facturas de autos y de la solidaridad en nada



alteran lo razonado, por cuanto se ha fundado la acción de cobro de pesos en norma expresa.

DÉCIMO.- Que, a continuación, es necesario emitir pronunciamiento respecto de la acusación de que la actora ha contravenido sus actos propios, cuestión que no se advierte por esta sentenciadora, por cuanto ambas acciones se han justificado en derecho y se encuentran avaladas por la documental aparejada; asimismo, como se señaló en el párrafo final del motivo anterior, en nada altera lo resuelto la identidad de la persona jurídica plasmada en las referidas facturas, por cuanto la acción de cobro de pesos seguida en este proceso se ha fundado en norma expresa; en consecuencia, dicha defensa será del todo desestimada.

UNDÉCIMO.- Finalmente, en cuanto a la **excepción de cosa juzgada**, esta sentenciadora coincide con lo expresado por la actora en cuanto a que no se ha verificado la triple identidad exigida por dicha institución para que la excepción prospere, por lo que también ésta será desechada.

DUODÉCIMO.- Así las cosas, habiéndose desechado la totalidad de las defensas promovidas por la demandada, corresponde referirse a la acción de cobro de pesos deducida en autos, la que se ha fundado, como ya se señaló, en las facturas las N°s **5860751, 5903138 y 5943943**, cuyo total asciende a la suma de **\$35.056.091.-** y específicamente en la calidad de dueño del inmueble de la demandada en relación a lo dispuesto en los artículo 141 y 225, letra q) de la Ley General de Servicios Eléctricos.

DÉCIMO TERCERO.- Que, en ese contexto, conforme lo prescrito por las normas jurídicas antedichas, resulta determinante para la procedencia de la acción de cobro de pesos de autos, acreditar la propiedad de la demandada del inmueble de autos, para ello la actora ha acompañado una copia del inscripción de dominio a nombre de la demandada del inmueble ubicado en **calle Cardonal, comuna de Puerto Montt**, documento que si bien acredita que tal inmueble fue adquirido por el Banco Santander Chile a la empresa Roblencina Servicios Limitada, con fecha 28 de febrero de 2017, no se condice con el domicilio indicado en las facturas



de autos, cual es, el ubicado en calle Inmaculada N°628, PARQ.INDUST.RECONDO, Puerto Montt.

Ahora bien, sin perjuicio de lo previamente señalado, corresponde remitirse a las mismas aseveraciones efectuadas por la demandada en sus presentaciones, de las cuales se desprende que es la dueña del inmueble ubicado en calle Inmaculada N°628, PARQ.INDUST.RECONDO, Puerto Montt, por cuanto, en su escrito de fecha 04 de octubre de 2021, señaló expresamente en su punto N°3 que “no está discutida la propiedad del inmueble al que corresponden las facturas cobradas en autos”, lo que permite a esta sentenciadora concluir que se han reunido los elementos de gravedad, precisión y concordancia, para que se configure una presunción judicial sobre este hecho, tal cual como lo dispone el artículo 1712 del Código Civil en relación al artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, constituyéndose plena prueba al respecto.

DÉCIMO CUARTO.- En definitiva, habiéndose acreditado el dominio del inmueble en el cual se ha prestado el servicio cobrado en autos, de conformidad a los artículos 141 y 225, letra q) de la Ley General sobre Servicios Eléctricos, resulta del todo procedente acoger el cobro que se pretende en autos, tal como se dirá en la parte resolutive de la sentencia.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que, no habiéndose acreditado pago alguno en el proceso ejecutivo aludido por la demandada, no resulta procedente acoger un eventual doble cobro de la obligación cobrada en autos. Ahora bien, en caso de efectuarse pago por la vía ejecutiva antedicha, comprendiéndose en ella la totalidad de las facturas cobradas en este proceso, deberán deducirse dichos pagos de lo adeudado en este proceso en la etapa de liquidación del crédito.

DÉCIMO QUINTO.- Que tratándose la obligación demandada de una obligación dineraria que genera intereses en caso de no pago, declarada y reconocida judicialmente su existencia, se hará lugar al cobro de los intereses, a la tasa de interés corriente aplicable a operaciones de crédito de dinero no reajustables, desde la fecha de notificación de esta sentencia, hasta la de pago total y efectivo.



DÉCIMO SEXTO.- Que los demás antecedentes que obran en autos en nada alteran lo precedentemente resuelto.

Visto, además lo que disponen los artículos 1437 y 1698 del Código Civil; 144, 160, 170, 254, 341 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, Ley General de Servicios Eléctricos; **SE DECLARA:**

1.- Que se rechazan las excepciones de falta de legitimación pasiva y de cosa juzgada;

2.- Que se acoge la demanda de cobro de pesos, y en consecuencia se declara que la demandada, **BANCO SANTANDER CHILE**, debe pagar a la demandante, la suma de **\$35.056.091.-**, más reajustes e intereses, y las costas del juicio.

Regístrese y archívense en su oportunidad.

Pronunciada por doña **PATRICIA ILSE CASTRO PARDO**,
JUEZ TITULAR

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, doce de Julio de dos mil veintidós**

